

INFORME COMPLEMENTARIO INDH

COMITÉ DE PROTECCIÓN DE LOS  
DERECHOS DE **TODOS LOS**  
**TRABAJADORES MIGRATORIOS**  
Y DE SUS FAMILIARES  
2011

ESPAÑOL/**ENGLISH**/FRANÇAIS

Informe complementario a la presentación del Estado  
de Chile ante el Comité de Protección de los Derechos de  
Todos los Trabajadores Migratorios y sus familiares





# Informe complementario a la presentación del Estado de Chile ante el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus familiares

## A. ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS DE LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y SUS FAMILIARES

---

1. La interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos son características que, tratándose de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares, son especialmente relevantes. Lo anterior, pues a pesar de la formulación universal de los tratados internacionales de derechos humanos, habitualmente quienes son nacionales de un país cuentan con una protección más intensa de sus derechos fundamentales que quienes son extranjeros. Históricamente, los trabajadores migrantes y sus familiares han sufrido manifestaciones de racismo, xenofobia y otras formas de discriminación y trato inhumano y degradante en diferentes partes del mundo<sup>1</sup> que les impiden un pleno goce de sus derechos humanos.
2. Actualmente las complejidades propias del modelo económico, barreras culturales (como el lenguaje y las costumbres) y legales, la xenofobia y el racismo, generan dificultades en el ingreso y la circulación de los trabajadores migrantes y sus familiares y, por supuesto, en sus condiciones de vida. Igualmente impactan en el tipo de trabajo al que pueden acceder. Prueba de ello es que en muchas ocasiones los trabajadores migrantes, con independencia de su grado de preparación profesional, realizan trabajos en condiciones precarias y con salarios que no son atractivos para las/los nacionales del país. Esta situación las/los expone a ser víctimas de abusos de parte de sus empleadores/as, especialmente quienes han ingresado al país en forma indocumentada o irregular.
3. Las condiciones de precariedad pueden verse agravadas por factores que tanto en los países de origen como de destino, tradicionalmente son fuente de discriminación. La raza, el sexo, la orientación sexual, la edad, la extracción socio-económica, la opinión política y el credo, entre otros, son elementos que pueden contribuir a colocar a las personas en condiciones de vulnerabilidad. Estos problemas se exacerbaban en los casos de personas refugiadas o víctimas de tráfico y trata.
4. A mayor abundamiento, las personas migrantes dejan atrás historias y lazos que muchas veces dificultan y hacen más compleja su inserción en los países de destino. Es frecuente que quienes migran tengan bajo su cuidado a familiares, particularmente hijas/hijos, padres y hermanas/os. Esta situación da lugar a arreglos familiares que constituyen verdaderas cadenas de cuidado transnacionales que, además, dan lugar a un significativo envío de remesas a los países de origen de las personas migrantes, las que en muchos casos representa porcentajes significativos del PIB de muchos países. Por ejemplo, la feminización de la migración en los países andinos de la región ha puesto en evidencia esta situación.

---

1 Esta situación ha sido reconocida en reiteradas ocasiones por la Comunidad Internacional. En este sentido ver Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 1999/44, Derechos humanos de los migrantes, 56ª sesión, 27 de abril de 1999.

5. Si bien la migración no es fenómeno social nuevo, lo cierto es que como constata la Organización Internacional del Trabajo, en los últimos 20 años ha pasado a ser uno de los temas más importantes de la política mundial. Además, las estadísticas indican que lejos de disminuir, la migración internacional continuará aumentando<sup>2</sup>.
6. Ante esta realidad, en orden a respetar y garantizar los derechos humanos de los migrantes en general, y de los trabajadores migrantes en particular, resulta determinante para la comunidad internacional reconocer que los tratados internacionales de derechos humanos consagran obligaciones para los Estados que éstos deben cumplir con independencia del estatus migratorio de una determinada persona<sup>3</sup>.
7. Tal y como reconoce el Estado de Chile en su informe, muchas de estas definiciones, estándares y derechos no están presentes en su legislación. El Estado de Chile no puede estar ajeno al cumplimiento de estas obligaciones internacionales y debe avanzar hacia la adecuación de su legislación interna a los derechos y estándares contenidos en la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Si bien los tratados internacionales de derechos humanos reconocen la legitimidad de las políticas y leyes que los Estados dicten para resguardar sus fronteras y regular la migración, lo cierto es que los derechos humanos constituyen un límite al accionar de los Estados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos al efecto recientemente señaló que “si bien los Estados guardan un ámbito de discrecionalidad al determinar sus políticas migratorias, los objetivos perseguidos por las mismas deben respetar los derechos humanos de las personas migrantes”<sup>4</sup>.
8. Los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos establecen obligaciones que los Estados deben cumplir y que pueden demandar, incluso, de la cooperación entre éstos. Este deber es manifiesto ante situaciones como la trata y tráfico de personas, donde la acción individual de un Estado puede no ser suficiente para desarticular las redes de criminalidad organizada que sustentan estos crímenes<sup>5</sup>. El Estado chileno debe, por tanto, llevar adelante iniciativas que permitan establecer puentes de cooperación con otros Estados, la sociedad civil organizada y, en general, con la comunidad internacional. Sólo de esta forma podrá visibilizar todas las complejas aristas que rodean el fenómeno de la migración y cumplir cabalmente con el respeto y garantía de los derechos humanos de los trabajadores migrantes y sus familiares.

---

2 Organización Internacional del Trabajo. International labour migration: A rights based approach. Resumen Ejecutivo.

3 Prueba de ello son los pronunciamientos de diferentes órganos de derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos. Cada uno de estos órganos ha analizado a través de casos individuales o recomendaciones generales, la extensión y contenido de los derechos humanos de las personas migrantes.

4 Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 97.

5 En este sentido ver Corte Europea de Derechos Humanos. Case of Rantsev v. Cyprus and Russia. Application no. 25965/04. Judgment. Strasbourg, 2010.

6 Martínez Pizarro, Jorge. EL encanto de los datos. Sociodemografía de la inmigración en Chile según el censo de 2002. Serie población y desarrollo. (49) CEPAL. Santiago, Chile.

## B. CONSIDERACIONES GENERALES

---

9. El Estado de Chile ha realizado esfuerzos en los últimos años por adecuar su legislación y sus políticas públicas en materia migratoria a los estándares internacionales de derechos humanos en un contexto de cambio de paradigma sobre la regulación de la migración. Chile ha transitado desde un entendimiento de ésta como una materia propia de la seguridad nacional, a una tributaria del campo de los derechos humanos. Prueba de ello son (i) las modificaciones a la legislación heredada de la dictadura, destinadas a hacer más eficiente la gestión migratoria; (ii) la coordinación intersectorial entre ministerios, particularmente de salud y de educación, para asegurar el pleno goce del derecho a la salud y a la ecuación de mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes en condición de irregularidad; (iii) las amnistías y procesos de regularización de la condición migratoria irregular; y, por supuesto, (iv) la ratificación de la presente convención. Resultan igualmente dignas de elogio las múltiples declaraciones públicas de altos funcionarios de Gobierno donde se reconoce que Chile es un “país de acogida”.
10. A pesar de estos notables esfuerzos, estas acciones han resultado insuficientes para enfrentar los cambios que en los últimos 20 años han experimentado los flujos migratorios en nuestro país. Si bien, y como se destaca en el informe del Estado, Chile continúa siendo un país mayoritariamente emisor de migrantes, en los últimos años ha aumentado considerablemente la migración desde países andinos a Chile. Esta migración se caracteriza, entre otros factores, por una población mayoritariamente femenina, en edad activa, educada y que migra para trabajar<sup>6</sup>. Quienes llegan a Chile, sin embargo, se enfrentan a una institucionalidad que no está preparada para su llegada. Nuestro país no cuenta con un cuerpo normativo único, claro y accesible para todas las personas. Tampoco existe una política pública migratoria, sino acciones en las que el Estado, muy correctamente, ha reaccionado ante los problemas más urgentes que han afectado a poblaciones en riesgo –como mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes en condición de irregularidad–, pero que no constituyen medidas programáticas.
11. Quienes migran a nuestro país también deben enfrentar situaciones de discriminación y xenofobia complejas que debieran hacernos reflexionar sobre las acciones que el Estado y la sociedad civil deben adoptar para superar este flagelo y promover los derechos humanos de la población migrante. Situaciones como la del ciudadano ecuatoriano Freddy Quiñones<sup>7</sup> y la de una persona

---

7 La grabación de la detención se encuentra disponible en <http://www.youtube.com/watch?v=qdNSt5EITMs>. Para mayor información <http://latercera.com/noticia/nacional/2011/03/680-350166-9-carabineros-descarta-discriminacion-en-detencion-de-hombre-de-raza-negra.shtml>  
<http://www.publimetro.cl/nota/cronica/freddy-quinones-responde-a-carabineros-si-hubiera-sido-violento-estaria-presoxlQkcj!G4rLEicBkHMas/>

afrodescendiente expulsada por su color de un servicio público<sup>8</sup>, son expresiones mediáticas de los problemas de discriminación y xenofobia a los que se enfrenta la población migrante.

12. Si bien es claro que existe en la voluntad de las autoridades el deseo de avanzar en el respeto y garantía de los derechos humanos de las/los trabajadoras migrantes y sus familiares, esta tarea demanda acciones más decididas. Una primera medida es contar con un diagnóstico acabado de la realidad migratoria en Chile, el cual debiera incluir, entre otras materias, una revisión de las necesidades, conflictos y obstáculos que enfrentan las/los trabajadoras migrantes y sus familiares. Para estos efectos es relevante contar con información cuantitativa desagregada por sexo, ubicación geográfica y edades. Además, es necesario que exista un diálogo con la sociedad civil organizada, de forma tal de recoger las inquietudes que en esta materia ellas han podido establecer. Estas acciones permitirán al Estado diseñar e impulsar políticas públicas y legislación que reconozca la situación concreta en la que se encuentran las/los trabajadoras migrantes y sus familiares y, de esta forma, respetar y garantizar efectivamente sus derechos humanos.

## C. OBSERVACIONES GENERALES AL INFORME INICIAL NACIONAL DE CUMPLIMIENTO DE LA CMW.

---

13. El informe presentado por el Estado de Chile no contiene toda su información desagregada por sexo, a pesar de constatar que en los últimos años ha habido una creciente feminización de la migración. Tampoco menciona si el género ha sido un factor relevante al momento de diseñar e implementar las acciones estatales en materias migratorias. Esta puede ser la causa por la cual no se mencionan programas orientados a las mujeres trabajadoras migrantes, que aborden su realidad laboral, económica o social, ni los principales problemas que las aquejan y las acciones que se implementarán al efecto.
14. Igualmente, el informe se enfoca en la descripción de la normativa y las acciones que se han implementado, sin que exista una evaluación de éstas. Es decir, no consta en el informe un análisis sobre cuáles han sido, en la práctica, los principales impactos de las regulaciones y políticas aplicadas, ni de las principales dificultades en el goce de los derechos fundamentales de las/los trabajadoras migrantes y sus familias. La ausencia de esta mirada constituye una carencia importante. El pleno goce de los derechos humanos no está limitado a un sustrato formal de leyes y políticas, sino que requiere que éstos puedan ser plenamente ejercidos por sus titulares.
15. En su informe el Estado señala que se han aumentado los recursos para atención de público. No existe constancia en el informe de una evaluación de la calidad de la atención que se entrega a las/los migrantes en las distintas regiones del país, particularmente aquellas donde más habitualmente se produce el ingreso.

---

<sup>8</sup> Artículo 84 del Decreto Ley N° 109: “La medida de expulsión de los extranjeros será dispuesta por Decreto Supremo fundado, suscrito por el Ministro del Interior bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, en el que se reservarán al afectado los recursos administrativos y judiciales legalmente procedentes. No obstante, la expulsión de los extranjeros sean titulares de permiso de turismo o prolonguen su permanencia con dicho permiso vencido, se dispondrá, sin más trámite, las por resolución del Intendente Regional respectivo, exenta del trámite de toma de razón. Las medidas de expulsión podrán ser revocadas o suspendidas temporalmente en cualquier momento. La medida de traslado a que se refieren los artículos 81, 82 y 83 será dispuesta por autoridades oficiales señaladas en el artículo 10, con el objeto de poner al afectado a disposición de las autoridades administrativas o judiciales correspondientes.”

16. El Estado destaca que la normativa laboral establece que las empresas que cuenten con más de 25 trabajadores/as deben estar compuestas por un 85% de chilenos/as. Se requiere fundamentar el sentido que tiene esta medida y si resulta razonable y no discriminatoria.
17. La actual legislación migratoria señala que quienes tienen residencia como acompañantes no pueden ejercer actividades remuneradas. Se requiere contar con información del impacto que esta norma acarrea en las relaciones de género al interior de los grupos familiares.
18. El Estado señala que en ocasiones se han considerado situaciones análogas al matrimonio, como es el caso de la convivencia, para efectos de la gestión migratoria. También se menciona que, atendido el valor y la importancia de la familia, se contempla la posibilidad de la reunificación familiar. Resulta necesario indagar si esta política de Estado es difundida entre la población migrante, si está sujeta a la discrecionalidad de los funcionarios que analizan cada caso y si se condiciona la reunificación familiar de cónyuge, conviviente, hijo/hija o familiar a la existencia de antecedentes penales o sanciones por incumplimiento de las leyes migratorias chilenas.
19. El informe destaca que en Chile todas las personas tienen derecho a la libertad personal. El efectivo goce de este derecho supone que cuando éste ha sido vulnerado las personas puedan reclamar de dicha acción. Para estos efectos resulta fundamental la asistencia legal gratuita, siendo necesario consignar en el informe si las personas migrantes hacen uso de los servicios que prestan las corporaciones de asistencia judicial gratuita.
20. Igualmente, se indica que en caso de que se decreta la expulsión del país, las personas cuentan con un plazo de 24 horas para presentar un recurso de reconsideración ante la Excm. Corte Suprema, acción que paralizaría el proceso de expulsión hasta la resolución del caso por la Corte<sup>9</sup>. Se requiere contar con información estadística del número de trabajadores migrantes, con independencia de su situación migratoria, han presentado el recurso respectivo y evaluar la posibilidad de ampliar el plazo establecido.
21. De acuerdo a lo señalado en el informe presentado por el Estado, los extranjeros en Chile pueden pertenecer a diversas categorías de acuerdo al permiso de residencia<sup>10</sup> con que cuenten. En efecto, las personas que migran a Chile no tienen como condición contar con un contrato de trabajo puesto que no es requisito para su ingreso. Ello, sin embargo, puede acarrear altos grados de desprotección para dichas personas en la medida que no consigan un trabajo formal y queden expuestas a trato abusivo por parte de eventuales empleadores informales. Se requiere contar con información sobre el número de denuncias o demandas que se reciben por incumplimiento de las leyes laborales.
22. El Estado destaca en su informe que las personas pueden denunciar situaciones de abuso con independencia de su condición de migración irregular. Sin embargo, dicha condición hace poco factible que una persona solicite la intervención de un órgano del Estado siendo necesario contar con información sobre qué políticas del Estado se han desarrollado para fiscalizar situaciones de abuso en las áreas económicas donde mayoritariamente se desempeña la población migrante.

9 El Director Regional Arica y Parinacota del FOSIS don Patricio Piña señaló que “no me gusta trabajar con negros”. Posteriormente tuvo que presentar su renuncia al Director Ejecutivo del FOSIS don Claudio Storm, la cual fue aceptada.

10 Residentes oficiales, residentes estudiantes, residentes temporarios, asilados o refugiados, tripulantes y residentes sujetos a contrato. Párrafo 84 CMW/C/CHL/1



23. El INDH está verificando, en el ámbito de sus atribuciones, la información recibida sobre posibles situaciones de abuso a trabajadoras/es migrantes en la zona norte, quienes migran para trabajar como temporeras/os en la agricultura. Estas personas trabajarían presuntamente sin el equipo y protección adecuada manipulando materiales químicos peligrosos, con horarios de trabajo muy superiores a los permitidos legalmente y en condiciones de salubridad y vivienda inhumanas. Resulta necesario conocer si el Estado cuenta con antecedentes de esta situación y si se han incoado acciones para procurar sancionar a los responsables de estos abusos y proteger a la población migrante, en caso de ser efectivo. En la actualidad el Instituto Nacional de Derechos Humanos se encuentra recopilando antecedentes, de acuerdo al mandato que le otorga la ley, para presentar una eventual querrela o hacerse parte en la investigación que realiza el Ministerio Público sobre un posible delito de trata de personas, provenientes de Paraguay, en la VI Región del país.
24. Conforme con a lo comprobado por personal del Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuando una persona ha infringido la normativa nacional y tiene una condición de “migrante irregular”, las autoridades pueden requisar su documentación y deben entregarle una “Tarjeta de extranjero infractor”. La voz “infractor” resulta altamente estigmatizante y puede exponer al trabajador/a migrante a situación de maltrato y abuso a causa de su estatus migratorio
25. El Estado de Chile asegura a todas las niñas, niños y adolescentes el ingreso y mantención en la educación preescolar, básica y media, con independencia del estatus migratorio de sus padres. Esta medida es altamente valiosa y no puede sino ser elogiada. No obstante, si bien el acceso es determinante, también lo es el contenido y calidad de la educación. En este sentido, es importante que el Estado informe sobre el contenido de planes y programas de manera que permitan constatar la promoción de la diversidad, de otras culturas e historia garantizando que se elimine todo prejuicio, estigmatización y concepciones que promuevan la superioridad de un país por sobre otro.
26. De igual forma, si bien las/los migrantes y sus hijos pueden acceder a la educación superior, la posibilidad de contar con un crédito universitario estatal está reservada únicamente a las/los chilenos<sup>11</sup>. Resulta pertinente que el Estado adecue esta normativa permitiendo acceder al crédito universitario estatal para las/los migrantes garantizando así el derecho a la educación.
27. En el informe Estado hace referencia al proyecto de ley que permitiría a las/los chilenas/os en el extranjero votar en las elecciones nacionales. Dicho proyecto está en primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución; Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, no presenta movimiento desde el 30 de noviembre de 2010 y el Ejecutivo no le ha dado urgencia. Sería recomendable que el Estado estableciera una agenda que permita verificar avances en esta materia.
28. Resulta particularmente loable que el Estado de Chile asegure la atención en salud reproductiva a las mujeres migrantes con independencia de su condición migratoria. No obstante, se requiere contar con información que permite determinar a que etapas y en relación a que aspectos se realiza dicha atención.

---

11 Crédito Universitario – Fondo Solidario





Complementary Report to the presentation of the State  
of Chile before the Committee on the Protection of the  
Rights of All Migrant Workers and their families





# Complementary Report to the presentation of the State of Chile before the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and their families

## INTERNATIONAL STANDARDS OF HUMAN RIGHTS OF MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES

---

1. The interdependence and indivisibility of human rights are characteristics which are particularly relevant in the case of rights of migrant workers and members of their families, because despite the universal formulation of international treaties on human rights, usually individuals who are nationals of a country have a stronger protection of their fundamental rights than those who are foreigners. Historically, migrant workers and members of their families have suffered manifestations of racism, xenophobia and other forms of discrimination and inhuman and degrading treatment in different parts of the world<sup>1</sup> that prevent them from fully enjoying their human rights.
2. Nowadays the complexities of the economic model, cultural barriers (such as language and customs) and legal ones, xenophobia and racism, create difficulties for the entry and movement of migrant workers and members of their families and, naturally, in their life conditions. They likewise have an impact on the kind of work to which they may have access. Proof of this is that on many occasions migrant workers, regardless of the level of their professional training, work in poor conditions and for wages that are unattractive to national individuals. This situation exposes them to become victims of abuse by their employers, particularly those who have entered the country without documents or in an irregular way.
3. These precarious conditions may be aggravated by factors which are a source of discrimination in the countries of origin as well as in the countries of destination. Race, sex, sexual orientation, age, socio-economic status, political opinion and religion are, among others, elements that may contribute to place these individuals in vulnerable situations. These problems are exacerbated in the case of refugees or victims of white slavery and trafficking.
4. Furthermore, migrant individuals leave behind them histories and links which on many occasions render more difficult and complex their incorporation in the countries of destination. Frequently those who migrate have to look after family members, particularly daughters/sons, parents and sisters/brothers. This leads to family arrangements which constitute real transnational care chains which also give rise to significant remittances of money to the countries of origin of the migrant individuals, representing in many cases an important percentage of the GDP of many countries. The feminization of migration in the Andean countries of the region, for instance, has evidenced this situation.

---

<sup>1</sup> This situation has been repeatedly acknowledged by the International Community. On this subject, see Resolution of the Committee on Human Rights 1999/44, Human Rights of Migrant Workers, 56th meeting, April 27, 1999.

5. Although migration is not a new social phenomenon, the truth is that, as has been verified by the International Labour Organization, it has become in the last 20 years one of the most important issues of world politics. Furthermore, statistics show that far from diminishing, international migration will continue increasing<sup>2</sup>.
6. Given this reality, in order to respect and guarantee the human rights of migrant individuals in general, and of migrant workers in particular, it is essential that the community of States acknowledge that international treaties on human rights embody obligations which they must comply with, regardless of the migratory status of the individual<sup>3</sup>.
7. As the Chilean State acknowledges in its report, many of these definitions, standards and rights are absent from the legislation. The Chilean State cannot abstain itself from complying with these international obligations and must make progress towards adapting its internal legislation to the rights and standards contained in the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families. Although international treaties on human rights acknowledge the legitimacy of the policies and laws which the States enact to protect their frontiers and regulate migration, in fact human rights constitute a limit to the action of the States. The Inter-American Court of Human Rights recently stated regarding this matter that “although the States maintain a sphere of discretion in determining their immigration policies, the aims they pursue must respect the human rights of migrant individuals”<sup>4</sup>.
8. The human rights enshrined in international human rights treaties create obligations that states must meet and that may even demand cooperation between them. This duty is evident in situations such as slavery and trafficking of people, where the individual action of a State may not be enough to dismantle the organized crime networks that support these crimes<sup>5</sup>. The Chilean State must, therefore, carry out initiatives which will permit establishing bridges of cooperation with other States, organized civil society and, in general, with the international community. This is the only possible way in which all the complex issues of the migration phenomenon may be visualized and to fully comply with the respect and guarantee of the human rights of migrant workers and members of their families.

## A. GENERAL CONSIDERATIONS

---

9. The Chilean State has made efforts in recent years to adapt its legislation and public policies in migration matters to international human rights standards within a context of a change of paradigm in migration regulations. Chile has moved from considering it a matter belonging to

---

<sup>2</sup> International Labour Organization. International labour migration: A rights based approach. Executive Summary.

<sup>3</sup> **Proofs of this are the declarations of various human rights organizations, such as the United Nations Human Rights Committee, the Inter-American Commission on Human Rights, the Inter-American Court of Human Rights and the European Court of Human Rights.** Each one of these organizations have analyzed through individual cases or general recommendations, the extent and content of the *human rights* of migrant individuals.

<sup>4</sup> IDH Court. Case Vélez Loor Vs. Panama. Preliminary Exceptions, Form, Reparations and Court Costs. Ruling of November 23, 2010 Series C No. 218, par. 97.

<sup>5</sup> **In this matter, see European Court of Human Rights. Case of Rantsev v. Cyprus and Russia. Application no. 25965/04. Judgment.** Strasbourg, 2010.

the field of national security to consider it a matter belonging in the field of human rights. This is evidenced by (i) the amendments to the laws made at the time of the dictatorship, aimed at making more efficient immigration management; (ii) the intersectorial coordination between ministries, particularly health and education ministries, to ensure the full enjoyment of the right to health and equity of pregnant women, children and adolescents in irregular situation; (iii) the amnesties and regularization processes of irregular immigration status; and, naturally, (iv) the ratification of this convention. The multiple public statements of senior government officials recognizing that Chile is a “host country” are equally praiseworthy.

10. Despite these noteworthy efforts, these actions have proved insufficient to cope with the changes experienced by migration during the last 20 years in our country. Although, as noted in the State’s report, Chile remains a predominantly migration-sending country, in recent years the migration from Andean countries to Chile has significantly increased. This migration is characterized, among other factors, by a predominantly female population of working age, educated and which migrates to work<sup>6</sup>. However, those who arrive in Chile, have to face an institutional framework that is not prepared for their arrival. Our country does not have a single, clear and accessible regulatory body for everyone, nor is there a migratory public policy. There are simply actions in which the State has reacted in a very correct manner to the more urgent problems that have affected populations at risk –such as pregnant women, children and adolescents in an irregular situation, but these actions do not constitute programmatic measures.
11. Those who migrate to our country must also deal with complex situations of discrimination and xenophobia which should make us reflect on the actions the State and civil society should take to address this scourge and promote the human rights of migrants. Situations such as that of the Ecuadorian citizen Freddy Quiñones<sup>7</sup> and a person of African descent dismissed on account of his color<sup>8</sup> from a public service are media-biased expressions of the problems of discrimination and xenophobia which the migrant population has to face.
12. While there is clearly a will of the authorities to advance in the respect and guarantee of the human rights of migrant workers and members of their families, this task demands stronger actions. A first step is to have a thorough diagnosis of the migration situation in Chile, which should include, among other matters, a review of the needs, conflicts and obstacles facing migrant workers and members of their families. For this purpose, it is important to have quantitative data disaggregated by sex, geographical location and ages. In addition, there must be a dialogue with organized civil society, in order to learn about the issues which they have been able to establish

---

6 Martínez Pizarro, Jorge. EL encanto de los datos. Sociodemografía de la inmigración en Chile según el censo de 2002(The charm of data. (Sociodemography of immigration in Chile according to the 2002 census.) Serie población y desarrollo. (Population and development series) (49) CEPAL. Santiago, Chile.

7 The recording of the arrest is available at: <http://www.youtube.com/watch?v=qdNSt5EITMs>. For further information, see:<http://latercera.com/noticia/nacional/2011/03/680-350166-9-carabineros-descarta-discriminacion-en-detencion-de-hombre-de-raza-negra.shtml>  
<http://www.publimetro.cl/nota/cronica/freddy-quinones-responde-a-carabineros-si-hubiera-sido-violento-estaria-presoxIQkcj!G4rLEicBkHMas/>

8 The Regional Director for Arica and Parinacota of the FOSIS (Solidarity and Social Investment Fund), Mr. Patricio Piña said: “I don’t like working with black people”. Subsequently, he had to tender his resignation to the Executive Director of the FOSIS, Mr. Claudio Storm, which was accepted.



in this area. These actions will enable the State to design and promote public policies and laws that recognize the specific situation of migrant workers and members of their families and thus, effectively respect and guarantee their human rights.

## **B. OBSERVATIONS ON THE INITIAL NATIONAL REPORT OF COMPLIANCE WITH THE CMW.**

---

13. The report submitted by the Chilean State does not have its data disaggregated by sex, despite the fact that in recent years there has been an increasing feminization of migration. It also does not mention whether gender was a relevant factor when designing and implementing State actions in migration matters. This may be why no programs targeted to migrant women workers are mentioned, dealing with their labor, economic or social reality, or the main problems that afflict them and the actions to be implemented for this purpose.
14. Likewise, the report is focused on the description of the regulations and the actions that have been implemented, without any assessment of said actions. That is to say, the report does not have an analysis of what have been, in practice, the principal impacts of the regulations and policies applied, nor of the main difficulties in the enjoyment of the fundamental rights of migrant workers and members of their families. The absence of this viewpoint is a major shortfall. The full enjoyment of human rights is not limited to a formal substratum of laws and policies. It requires that they may be fully exercised by their holders.
15. In its report the State notes that there has been an increase in resources for public service. There is no evidence in the report of an evaluation of the quality of the service provided to migrant individuals in the different regions of the country, particularly those where entrance most commonly occurs.
16. The State notes that labor laws establish that companies with more than 25 workers must be composed by 85% of Chilean workers. Grounds for this measure must be provided and also whether this measure is reasonable and nondiscriminatory.
17. The current immigration law states that those who have residence as accompanying relatives cannot engage in remunerated activities. Information is required on the impact this regulation creates in the gender relationships within family groups.
18. The State observes that sometimes situations similar to marriage have been considered, such as co-habitation, for purposes of migration management. It is also stated that, given the value and importance of the family, the possibility of family reunification is being considered. It is necessary to know whether this State policy is made known to the migrant population, whether it is subject to the discretion of the officials analyzing each case and whether the family reunification of spouse, cohabitant, son/daughter or relative is made conditional to the existence of criminal records or sanctions for breaches of Chilean immigration laws.

19. The report states that in Chile everybody has a right to personal freedom. The effective exercise of this right assumes that when it has been violated, the people may file a claim against said act. For this purpose, free legal aid is essential and it is necessary to include in the report whether migrant individuals make use of the services provided by free legal aid corporations.
20. It is also indicated that if an expulsion from the country is decreed, the people have a deadline of 24 hours to file an appeal for reconsideration before the Supreme Court, an action which would paralyze the expulsion process until the case is ruled by the Court<sup>9</sup>. Statistical information is required of the number of migrant workers, regardless of their migratory status, who have filed the respective appeal and to evaluate the possibility of extending the established deadline.
21. According to what is stated in the report submitted by the State, foreigners in Chile may belong to different categories according to their residence permit<sup>10</sup>. People who migrate to Chile do not need a work contract because it is not required for their admission. This, however, may make them highly vulnerable as long as they do not acquire a formal job and are exposed to the abusive treatment of any possible informal employers. Information is required on the number of complaints or claims filed for breach of labor laws.
22. The State observes in its report that people can report situations of abuse, regardless of their irregular migration status. However, this condition makes it unlikely that a person requests the intervention of a State organization and, therefore, it is necessary to have information about what State policies have been developed to monitor situations of abuse in the economic areas where the migrant population mainly works.
23. The INDH is checking, within the scope of its authority, the information it has received about possible situations of abuse to migrant workers in the northern part of the country, where they migrate to work as seasonal workers in agriculture. These persons would allegedly be working without the proper equipment and protection, handling hazardous chemicals, with far longer working hours than those legally permitted and in shameful health and housing conditions. It is necessary to know whether the State is aware of this situation and whether actions have been taken to sanction those responsible of these abuses and to protect the migrant population, if the aforesaid is true. Currently the Instituto Nacional de Derechos Humanos is collecting data, pursuant to the mandate granted to it by law, to file an eventual suit or to participate in the investigation carried out by the Public Prosecutor about a possible crime of trafficking people from Paraguay, in the VI Region of the country.
24. According to what has been confirmed by staff of the Instituto Nacional de Derechos Humanos, when a person has infringed national regulations and is in a situation of "irregular migrant", the

<sup>9</sup> Article 84 of Decree Law N° 109: *"The measure of foreigners' expulsion will be decided by a well-founded Supreme Decree, signed by the Minister of the Interior under the formula "By order of the President of the Republic", in which the party concerned will have access to the legally appropriate administrative and judicial remedies. However, the expulsion of foreigners who are holders of tourist permits or who extend their stay beyond said permit, will be decreed without further proceedings, by resolution of the relevant Regional Governor, exempt from recording formalities. Expulsion measures may be revoked or temporarily suspended at any time. The serving notice to which articles 81, 82 and 83 refer to shall be decreed by official authorities indicated in article 10, for the purpose of placing the party concerned at the disposal of the corresponding administrative or judicial authorities."*

<sup>10</sup> Official residents, student residents, temporary residents, asylees or refugees, crew and residents under contract. Paragraph 84 CMW/C/CHL/1

authorities may seize his/her documents and give him/her an “Infringing Foreigner Card”. The word “infringing” is highly stigmatizing and may expose the migrant worker to situations of mistreatment and abuse due to his/her immigration status.

25. The Chilean State guarantees for all children and adolescents admission and maintenance in preschool, primary and secondary education, regardless of their parents’ immigration status. This is a very valuable measure and can only be commended. However, although access is crucial, so is the content and quality of the education. In this sense, it is important that the State provides information about the content of plans and programs which will allow checking on the promotion of diversity, of other cultures and history, guaranteeing the elimination of all prejudices, stigmatization and ideas promoting the superiority of one country over another.
26. Likewise, although migrants and their children may have access to higher education, the possibility of obtaining a State credit for university studies is solely reserved for Chileans<sup>11</sup>. It would be appropriate for the State to change this rule, permitting access to university credit to migrant individuals, thus guaranteeing the right to education.
27. In the official report of the Chilean State, reference is made to the bill which would allow Chileans living abroad to vote for national elections. Said bill is in its first constitutional stage in the Committee on Constitution, Legislation and Justice of the House of Representatives. It has had no movement since November 30, 2010 and the Executive Branch has not granted urgency to said bill. It would be advisable that the State should establish an agenda to see the progress made in this matter.
28. It is particularly praiseworthy that the Chilean State ensures reproductive health care to migrant women, regardless of their immigration status. However, it is necessary to have information which will allow determining at what stage and in relation to what aspects said care is provided.

---

11 University Credit – Solidarity Fund





Rapport complémentaire à la présentation du Chili  
au Comité pour la protection des droits de tous les  
travailleurs migrants et des membres de leur famille





# Rapport complémentaire à la présentation du Chili au Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

## A. NORMES INTERNATIONALES DES DROITS DE L'HOMME SPÉCIFIQUES AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE

---

1. L'interdépendance et l'indivisibilité des droits de l'homme sont des caractéristiques particulièrement importantes en matière de droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. En effet, malgré l'élaboration de traités internationaux de portée universelle sur les droits de l'homme, les droits fondamentaux des ressortissants d'un pays sont habituellement mieux protégés que ceux des étrangers. Au fil de l'histoire et dans différents pays, les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont souvent été victimes de racisme, xénophobie et autres formes de discrimination et de traitements inhumains et dégradants<sup>1</sup> qui les ont empêché d'exercer pleinement leurs droits.
2. Actuellement, les dimensions complexes que revêtent le modèle économique, les barrières culturelles (telles que la langue ou les coutumes), les aspects juridiques, la xénophobie et le racisme entravent l'entrée et la circulation des travailleurs migrants et des membres de leur famille et bien entendu, elles dégradent leurs conditions de vie. De même, elles ont des répercussions sur le type d'emploi auquel les travailleurs migrants peuvent accéder. Preuve en est que très souvent, quel que soit leur niveau de formation, les travailleurs migrants travaillent dans des conditions précaires et pour des salaires jugés insuffisants par les ressortissants du pays. Cette situation les expose à des abus de la part de leurs employeurs, et les migrants entrés dans le pays par des moyens irréguliers ou sans documents valides sont particulièrement vulnérables.
3. Ces conditions précaires peuvent être aggravées par des facteurs de discrimination dans le pays d'origine comme dans le pays de réception. La race, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge, l'origine socio-économique, l'opinion politique et la religion ou conviction, entre autres, peuvent accentuer la vulnérabilité des migrants. Ces problèmes sont exacerbés quand il s'agit de personnes réfugiées ou victimes de trafic illicite ou de traite de personnes.
4. En outre, les personnes migrantes doivent quitter leur passé et leurs liens affectifs, ce qui rend souvent encore plus difficile leur insertion dans les pays de réception. Fréquemment, les migrants doivent entretenir des membres de leur famille, notamment leurs enfants, parents ou frères ou sœurs. C'est ainsi que souvent, ils doivent faire appel à des membres de leur famille pour mettre en place de véritables chaînes de garde transnationales, ce qui se traduit par le rapatriement de

---

1 Cette situation a été reconnue à maintes reprises par la communauté internationale. À ce sujet, voir la Résolution de la Commission des droits de l'homme 1999/44 portant sur les droits de l'homme des migrants, 56e séance, 27 avril 1999.



fonds vers les pays d'origine des migrants. Les fonds rapatriés représentent souvent une part non négligeable du PIB de nombreux pays. La féminisation de la migration dans les pays andins de la région témoigne de cette tendance.

5. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un phénomène social nouveau, comme souligne l'Organisation internationale du travail, le thème de la migration est depuis vingt ans au cœur de la politique à l'échelon mondial. De plus, les statistiques montrent que loin de diminuer, les mouvements internationaux de populations continueront de s'accroître<sup>2</sup>.
6. À la lumière de contexte, en vue de respecter et de garantir les droits de l'homme de l'ensemble des migrants et plus particulièrement des travailleurs migrants, il est essentiel que la communauté internationale reconnaisse les obligations prévues par les traités internationaux. Les États sont tenus de les remplir, quel que soit le statut migratoire d'une personne donnée<sup>3</sup>.
7. Conformément aux points évoqués dans le rapport du Chili, un grand nombre de ces définitions, normes et droits ne figurent pas dans la législation chilienne. Le Chili ne peut se soustraire à ces obligations internationales et doit adapter sa législation aux droits et normes prévus par la **Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille**. Bien que les traités internationaux des droits de l'homme reconnaissent la légitimité des politiques et des lois adoptées par les États pour défendre leurs frontières et contrôler la migration, il faut admettre que les droits de l'homme limitent la marge de manœuvre des États. La Cour interaméricaine des droits de l'homme a récemment signalé à cet égard que « bien que les États gardent une marge de manœuvre à l'heure de fixer leur politique migratoire, celle-ci doit veiller à respecter les droits de l'homme des personnes migrantes »<sup>4</sup>.
8. Les droits de l'homme consacrés dans les traités internationaux sur les droits de l'homme fixent des obligations que les États doivent remplir et qui peuvent même demander la collaboration entre ces derniers. L'accomplissement de ce devoir est de première importance dans la lutte contre la traite de personnes et de trafic illicite de migrants, car l'action individuelle d'un État risque d'être insuffisante pour démanteler les réseaux de crime organisé qui perpètrent ces crimes<sup>5</sup>. Par conséquent, le Chili doit conduire des initiatives permettant d'établir des passerelles pour la coopération avec d'autres États, les organisations de la société civile et en général avec la communauté internationale. La coopération est la seule manière de cerner les traits complexes qui caractérisent le phénomène de la migration et d'assurer intégralement le respect et la garantie des droits de l'homme des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

---

2 Organisation internationale du travail. La migration internationale de main-d'œuvre : une approche fondée sur les droits. Résumé exécutif.

3 Preuves en sont les observations des différents organes des droits de l'homme, tels que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, la Commission interaméricaine des droits de l'homme, la Cour interaméricaine des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme. Chacun de ces organes a analysé dans le cadre de cas individuels ou d'observations générales la portée et le contenu des *droits de l'homme* des personnes migrantes.

4 Cour interaméricaine des droits de l'homme. *Affaire Vélez Loor c. Panama. Exceptions préliminaires, fond, réparation et dépens*. Décision du 23 novembre 2010 Série C N° 218, paragr. 97.

5 À ce sujet, voir Cour européenne des droits de l'homme. *Affaire Rantsev c. Chypre et la Russie*. Requête n° 25965/04. Décision. Strasbourg, 2010.

## B. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

---

9. Au cours des dernières années, le Chili s'est efforcé d'adapter sa législation et ses politiques publiques en matière de migration aux normes internationales des droits de l'homme. Ces efforts ont pour toile de fond un changement de paradigme sur la réglementation de la migration. Le Chili est passé d'une vision de la réglementation en matière de migration comme un élément inhérent à la sécurité nationale à celle d'un élément du domaine des droits de l'homme. Preuves en sont (i) les modifications apportées à la législation héritée de la dictature en vue d'améliorer la gestion des migrations ; (ii) la coordination intersectorielle entre ministères, notamment entre le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé pour garantir l'accès à la santé des femmes enceintes, garçons, filles et adolescents en situation irrégulière ; (iii) les amnisties et procédures de régularisation des migrants en situation irrégulière ; et surtout (iv) la ratification de la présente Convention. On peut également applaudir les nombreuses déclarations publiques de hauts fonctionnaires du gouvernement qualifiant le Chili de « pays d'accueil ».
10. En dépit de ces efforts louables, ces actions se sont montrées insuffisantes pour faire face à l'évolution des flux migratoires dans notre pays au cours des deux dernières décennies. Bien que comme il est indiqué dans le rapport du Chili, le pays reste principalement émetteur de flux migratoires, au cours des dernières années on a assisté à une augmentation considérable de la migration en provenance de pays andins. Cette migration se caractérise, entre autres facteurs, par une population migrante principalement féminine, en âge actif, formée et qui migre pour travailler<sup>6</sup>. Les migrants qui arrivent au Chili se heurtent cependant à des institutions qui ne sont pas prêtes à les recevoir. Notre pays ne dispose pas d'un corps réglementaire unique, clair et accessible pour tous les individus. Il n'existe pas non plus de politique migratoire, mais plutôt des actions de l'État qui a correctement réagi pour remédier à des problèmes urgents touchant les populations à risque — femmes enceintes, garçons, filles et adolescents en situation irrégulière. Ces actions ne constituent pourtant pas des mesures pragmatiques.
11. Les personnes qui immigrent au Chili sont aussi victimes de discrimination et de xénophobie, phénomènes complexes qui devraient nous pousser à réfléchir sur les actions que l'État et la société civile devraient entreprendre pour contenir ce fléau et promouvoir les droits de l'homme de la population migrante. Des situations telles que celles qu'ont vécues le citoyen équatorien Freddy Quiñones<sup>7</sup> ou une personne afro descendante renvoyée d'un service public pour sa couleur<sup>8</sup> sont autant d'expressions médiatiques des problèmes de discrimination et de xénophobie dont la population migrante est victime.

---

6 Martínez Pizarro, Jorge. EL encanto de los datos. Sociodemografía de la inmigración en Chile según el censo de 2002. Serie población y desarrollo. (49) CEPALC. Santiago, Chili.

7 L'enregistrement de l'arrestation de Freddy Quiñones peut être visionné sur <http://www.youtube.com/watch?v=qdNSt5EITMs>. Pour des renseignements complémentaires : <http://latercera.com/noticia/nacional/2011/03/680-350166-9-carabineros-descarta-discriminacion-en-detencion-de-hombre-de-raza-negra.shtml>  
<http://www.publimetro.cl/nota/cronica/freddy-quinones-responde-a-carabineros-si-hubiera-sido-violento-estaria-presoxIQkcj!G4rLEicBkHMAs/>

8 Le directeur régional Arica et Parinacota du FOSIS (Fonds de solidarité et d'investissement social), Patricio Piña, a déclaré « je n'aime pas travailler avec des noirs ». Après avoir tenu ces propos, M. Piña a dû présenter sa démission au directeur général du FOSIS, Claudio Storm, qui l'a acceptée.

12. Bien que de toute évidence, les autorités aient la volonté d'aller de l'avant dans le respect et la garantie des droits de l'homme des travailleurs migrants et de leur famille, cette tâche exige des actions plus musclées. Une première mesure consiste à établir un diagnostic détaillé de la réalité migratoire au Chili. Cet état des lieux devrait inclure, entre autres, une révision des besoins, conflits et obstacles auxquels s'achoppent les travailleurs migrants et leur famille. À cet effet, il convient de disposer de données quantitatives désagrégées par sexe, âge et zone géographique. En outre, il s'avère nécessaire d'entretenir un dialogue avec les organisations de la société civile afin de recueillir leurs inquiétudes en matière de migration. Ces actions permettront à l'État d'élaborer et de promouvoir une politique publique et une législation qui tiennent compte de la situation concrète que vivent les travailleurs migrants et les membres de leur famille, et par là, respecter et garantir effectivement leurs droits de l'homme.

## C. OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LE RAPPORT INITIAL PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION PRÉSENTÉ PAR LE CHILI.

---

13. Le rapport présenté par le Chili n'inclut pas de données désagrégées par sexe, quand bien même ces dernières années on ait observé une féminisation de la migration. Le rapport ne précise pas non plus si le sexe a été un facteur décisif à l'heure d'élaborer et de mettre en œuvre les actions étatiques en matière de migration. Ceci explique peut-être le fait qu'il ne soit pas question de programmes orientés aux femmes travailleuses migrantes, abordant leur situation d'emploi, économique ou sociale, les principaux problèmes qui les touchent et les actions prévues à cet effet.
14. De même, le rapport met l'accent sur la description de la réglementation et des actions mises en œuvre mais n'en fait pas l'évaluation. Le rapport ne fournit donc pas une analyse de l'impact concret des nouvelles réglementations et politiques appliquées, ni un examen des principales difficultés que rencontrent les travailleurs migrants et les membres de leur famille dans l'exercice de leurs droits fondamentaux. Il convient de souligner qu'il s'agit là d'une lacune non négligeable. L'exercice des droits de l'homme ne se limite pas à un substrat formel de lois et de politiques, au contraire, il exige que ces droits soient pleinement exercés par leurs détenteurs.
15. Dans son rapport, le Chili signale l'augmentation des ressources allouées à l'attention du public. Le rapport ne fait pas mention d'une évaluation de la qualité des services publics prêtés aux migrantes et aux migrants dans les différentes régions du pays, notamment dans les régions les plus productives.
16. Le Chili souligne que le Code du travail prévoit que 85 % du personnel des entreprises de plus de 25 salariés doit être de nationalité chilienne. Il conviendrait d'argumenter le sens d'une telle mesure, et évaluer si elle est raisonnable et non discriminatoire.
17. La législation actuelle en matière de migration stipule que les personnes qui résident dans le pays à titre de conjoint ne peuvent pas exercer une activité rémunérée. Il convient de glaner des informations sur l'impact d'une telle mesure sur les rapports de genre au sein des ménages.
18. Le Chili signale également que dans la pratique de la gestion de l'immigration, la notion de membre de la famille a été élargie pour inclure des situations analogues au mariage, telles

que la cohabitation. Il est également précisé que vu l'importance et la valeur de la famille, on envisage la possibilité de garantir le regroupement familial des migrants. Il faut étudier si cette politique d'État est diffusée au sein de la population migrante, si sa mise en œuvre dépend des fonctionnaires chargés d'analyser chaque cas et si l'octroi du droit de regroupement familial avec le conjoint, concubin, fils ou fille ou membre de la famille peut être refusé en cas de casier judiciaire chargé ou de sanctions pour violation des lois migratoires chiliennes.

19. Le rapport mentionne qu'au Chili, tous les individus ont droit à la liberté. Le plein exercice de ce droit suppose que quand les individus en sont privés, ils peuvent réclamer le respect de cette garantie. Pour cela, l'assistance juridique gratuite se veut indispensable et il est nécessaire de préciser dans le rapport si les migrants ont recours aux services prêtés par les centres d'assistance juridique gratuite.
20. De même, il est indiqué qu'en cas d'avis d'expulsion, les immigrants disposent d'un délai de vingt-quatre heures pour présenter un recours judiciaire en réclamation à la Cour suprême. Ce recours suspend la mesure d'expulsion jusqu'à son traitement par la Cour<sup>9</sup>. Il faudrait fournir des données statistiques sur le nombre de travailleurs migrants, indépendamment de leur statut migratoire, à avoir présenté ledit recours et évaluer la possibilité d'élargir de délai fixé par la loi.
21. Conformément aux informations incluses dans le rapport présenté par le Chili, les étrangers au Chili peuvent appartenir à différentes catégories suivant le permis de résidence dont ils disposent<sup>10</sup>. En effet, les personnes qui migrent au Chili ne sont pas tenues d'être titulaires d'un contrat de travail, car ce n'est pas une condition pour entrer dans le pays. Ceci peut néanmoins rendre les travailleurs migrants vulnérables, dans la mesure où s'ils ne trouvent pas un emploi formel, ils risquent d'être exposés à des traitements abusifs de la part d'employeurs informels. Il convient de recueillir des données sur le nombre de dénonciations ou d'actions en justice reçues pour non-observation des dispositions du Code du travail.
22. Dans son rapport, le Chili précise que les individus peuvent dénoncer les abus dont ils sont victimes, même s'ils sont des migrants en situation irrégulière. Néanmoins, il est peu probable qu'une personne en situation irrégulière demande l'intervention d'un organe de l'État, aussi, il semble indispensable de disposer d'informations sur les politiques d'État mises en œuvre pour contrôler les abus dans les secteurs économiques où travaille principalement la population migrante.
23. L'INDH (Institut national des droits de l'homme) étudie, dans la limite de ses compétences, les informations reçues sur d'éventuels abus perpétrés dans le nord du Chili à l'encontre de travailleurs migrants — hommes et femmes — qui migrent pour travailler temporairement dans le

---

9 Article 84 du décret de loi no 109 : L'expulsion des étrangers ne peut être requise que par décret suprême du ministère de l'Intérieur selon la formule « Sur ordre du Président de la République », et l'étranger visé par une mesure d'expulsion dispose des ressources administratives et judiciaires juridiquement pertinentes. Néanmoins, les étrangers titulaires d'un visa de tourisme ou qui prolongent leur séjour après l'expiration de ce visa peuvent être expulsés par le gouverneur régional sur le fondement d'une décision qui n'est pas soumise à un contrôle de légalité. Les mesures d'expulsion pourront être révoquées ou suspendues temporairement à tout moment. La mesure de transfèrement à laquelle font référence les articles 81, 82 et 83 sera prise par les autorités signalées à l'article 10 afin de mettre la personne concernée à disposition des autorités administratives ou judiciaires pertinentes.

10 Simples résidents, étudiants, résidents temporaires, demandeurs d'asile ou réfugiés, membres d'équipage et résidents sous contrat. Paragraphe 84 CMW/C/CHL/1

secteur agricole. Il semblerait que dans le cadre de leur travail, ces personnes ne sont pas dûment équipées et protégées lors de la manipulation de produits chimiques dangereux, elles ont des horaires de travail bien supérieurs à ce qui est permis par la loi et travaillent et sont logées dans des conditions insalubres inhumaines. Il convient de reconnaître si l'État dispose d'informations sur cette situation et si des actions ont été entreprises pour sanctionner les responsables de ces abus et protéger la population migrante. Actuellement, l'INDH recueille, conformément au mandat que lui confie la loi, des informations pour éventuellement déposer une plainte ou participer à l'enquête menée par le ministère public sur un éventuel délit de traite de personnes originaires du Paraguay commis dans la VIe région du pays.

24. D'après les recherches menées par le personnel de l'Institut national des droits de l'homme, lorsqu'une personne enfreint la réglementation nationale et a le statut de « migrant en situation irrégulière », les autorités peuvent confisquer ses papiers d'identité et lui remettre une carte appelée « Tarjeta de extranjero infractor », soit une carte d'étranger en infraction. Le terme « infractor », ou auteur d'une infraction, est fortement stigmatisant et peut exposer le travailleur migrant ou la travailleuse migrante à des abus ou à de mauvais traitements en raison de son statut migratoire.
25. Le Chili garantit à tous les enfants et adolescents l'accès aux services d'éducation et une scolarisation au sein de l'enseignement maternel, primaire et secondaire, quel que soit le statut migratoire de leurs parents. Cette mesure tout à fait valable ne peut être qu'applaudie. Cependant, bien que l'accès à l'éducation soit déterminant, il en est de même pour le contenu et la qualité de l'enseignement. En ce sens, il est important que l'État fasse montre de transparence en ce qui concerne le contenu et les programmes afin que ceux-ci comprennent la promotion de la diversité, d'autres cultures et de l'histoire pour éliminer ainsi tout préjugé, stigmatisation ou conception défendant la suprématie d'un pays sur un autre.
26. De même, bien que les migrants et leurs enfants puissent accéder à l'enseignement supérieur, l'octroi de crédits universitaires de l'État est réservé aux personnes de nationalité chilienne<sup>11</sup>. Il est conseillé à l'État d'adapter cette réglementation pour permettre aux migrants et migrantes d'accéder aux crédits universitaires de l'État et leur garantir le droit à l'éducation.
27. Dans le rapport, le Chili fait allusion au projet de loi qui permettrait aux Chiliens vivant à l'étranger de participer aux élections nationales. Ce projet est en première phase d'examen constitutionnel par la Commission sur la Constitution, la législation et la justice de la Chambre des députés, il n'a pas avancé depuis le 30 novembre 2010 et le pouvoir exécutif ne lui a pour l'instant pas accordé un caractère d'urgence. Il conviendrait que l'État fixe un calendrier permettant d'évaluer les avancées en la matière.
28. Il faut applaudir le fait que l'État dispense des soins de santé reproductive aux femmes migrantes, qu'elles soient en situation régulière ou non. Cependant, il est nécessaire de disposer d'informations permettant d'évaluer à quelles étapes ces soins sont prodigués aux femmes migrantes et quels problèmes de santé reproductive et sexuelle sont principalement traités.

---

11 Fonds solidaire de crédit universitaire



